Entrevista completa sobre el aumento de las desapariciones en México (37435, a abril de 2018), realizada por correo el 24 de junio de 2018. Publicada casi íntegramente en *Zeta Tijuana*, semana del 29 de junio al 5 de julio de 2018, n. 2309, pp. 18A-21A. Entrevistador: Luis Carlos Sáinz Martínez.

- Doctor Jesús Pérez Caballero, ¿qué le indica el hecho de que el número de desaparecidos se haya incrementado en un ocho por ciento en seis meses?

Todavía es pronto para sacar conclusiones generales sobre esas cifras, sobre todo independientemente de lo que sucede a nivel local, donde las dinámicas son aún más complicadas de rastrear. Pero ante esas cifras tan abruptas, debe tenerse claro que todavía existe confusión en las instituciones sobre qué quiere decirse con un desaparecido. Si nos referimos a los desaparecidos violentamente, hay que comprender la naturaleza distinta de los dos rubros que los englobarían. Por un lado, tenemos la desaparición forzada, siempre que intervenga una institución oficial a cualquier nivel, o un individuo o grupo que cuenta con el apoyo, tolerancia o aquiescencia de una institución. En estos casos, el aumento en las cifras pueden tener que ver con operativos o con instituciones públicas al servicio coyuntural o estructural de grupos criminales –en estos últimos casos, llamarlos "instituciones públicas" es inexacto- . Por otro lado, la desaparición violenta promovida por un grupo criminal, del que no se sabe si opera en un territorio por la omisión de la autoridad –sea por incapacidad o por negligencia- y que es la que me parece más alarmante, por numerosa, es parte de conflictos vinculados a dinámicas más imprevisibles que las de las desapariciones forzadas en sentido estricto. Las dinámicas delincuenciales pueden tener que ver con el asesinato de rivales externos o internos, pero también con actuaciones desproporcionadas fruto de la posibilidad de actuar impunemente. En muchos casos sí se mata y se desaparece otra vez porque se ha podido matar y desaparecer sin impedimentos, en algún momento olvidado, difícilmente absorbible por el marco de la llamada "guerra al narcotráfico". Incluso tampoco puede descartarse que parte de ese aumento tenga que ver con esa *vox populi* que establece que estar en la recta final de un gobierno y en el principio de otro alienta a resolver aún más violentamente los conflictos –el fáustico año de Hidalgo-. Desde ese punto de vista, desaparecer a individuos sería una técnica fácil, con personas cada vez más preparadas y lugares cada vez más adecuados donde poder desaparecer a las víctimas. A falta de más datos, es lo más genérico que me atrevería a ser sobre su pregunta.

- ¿Qué tan indiferentes o comprometidos ve a los mexicanos ante este fenómeno criminal?

Suele depender de qué tipo de desaparecido sea la víctima. Es evidente que cuando es una persona cercana, al ciudadano le afecta directamente y exige explicaciones, y entra en la dinámica que supone la búsqueda de un desaparecido, que hoy por hoy todavía es más un tianguis de negociaciones y encuentro de aliados que preguntas y respuestas claras. Sin embargo, esa emotividad hacia el desaparecido se va perdiendo a medida que la víctima está más alejada. Eso es normal, porque en general estamos apegados a los nuestros y los anónimos son eso, gente sin nombre; pero el problema es que en México la desconexión emotiva es radical de municipio a municipio, hasta de colonia a colonia, y sin duda de entidad federativa a entidad federativa. No existe un círculo de afectividad, por así decirlo, que es una manera de apelar a una idea de ciudadanía con unos derechos irrenunciables y que servirían de cortafuegos frente a las desapariciones, lo suficientemente arraigado que nos permita rebasar los ámbitos más cercanos. Los movimientos de familiares de desaparecidos sí han logrado superar esos círculos cercanos y se relacionan entre sí, pero todavía falta que entre todos rompamos la idea gremial con la que la ciudadanía percibe a esos colectivos. Por supuesto que hay hechos, como Ayotzinapa o la desaparición de los tres jóvenes del CAAV en Guadalajara, que logran salir del lugar donde sucedieron, pero no se nos fijan con solidez, se disipan en el imaginario público. Digamos que esos movimientos han llegado a ser *ciclos* de reproche a las instituciones, pero el modo de desaparecer violentamente en México es como una *atmósfera*, que impregna prácticas violentas de todo tipo, unas a escala micro, otras a nivel macro. Quizá como ciudadanos aún no se haya salido de la indiferencia o la falta de compromiso hacia los desaparecidos porque esa expansión del círculo de afectividad supondría acercarse a individuos que, decididamente, han tenido que ver con el crimen organizado. Por ejemplo, con *zetas* desaparecidos, con secuestradores desaparecidos. No siempre es así, pero esa línea de pensamiento permite a sectores de las instituciones estigmatizar a la mayoría de desaparecidos violentos y enmarcar sus desapariciones en un *ajuste*, *reconfiguración* o cualquier otra palabra trampa, entre criminales (*pugnas entre cárteles*, se dice, un mantra que lleva años usándose y al que también se achacan la mayoría de homicidios violentos). A ese paradigma interpretativo lo han fiado las instituciones para no reconocer la complejidad rampante de esta crisis de violencia. Sin embargo, aunque esa teoría del ajuste fuera cierta -no lo creo- habría que explicar cómo

se insertan las autoridades en ese ajuste, es decir, la presencia de individuos vinculados a fuerzas de seguridad en las dinámicas violentas o, en el caso más extremo, por qué en algunos lugares ni siquiera las fuerzas de seguridad pueden hacer nada, mientras el mundo criminal se ajusta y desajusta en ese *perpetuum mobile* de reconfiguraciones. Considerando que el movimiento perpetuo es imposible, hay algo que nos está fallando en ese planteamiento. Por no decir que aunque todos los desaparecidos fuesen asesinos confesos la pregunta de por qué su desaparición ha de quedar impune sigue vigente. Y la respuesta no puede ser solamente "operativa", sino política, filosófica y moral.

- ¿Cómo considera el desempeño de las autoridades en el tema de las desapariciones forzadas por agentes del Estado y a manos también de particulares?

De nuevo, habría que ver qué quiere decirse con "autoridades". Si las autoridades están implicadas, como sucede cuando son desapariciones forzadas, la labor de estas suele ser tratar el asunto con opacidad y ganar tiempo ante la opinión pública para encapsular, aislar, a quienes han realizado la desaparición y, en ocasiones, entregarlo a otra rama de la institucionalidad para, si acaso, lo juzgue. Pero en mi opinión eso siempre cederá al axioma de que lo primordial es asegurar el orden (entendido como el statu quo) fomentado en una idea de seguridad esquemática. Permítame poner a los lectores dos ejemplos, uno pasado y otro reciente, para que comprendan qué quiero decir.

Si una desaparición tan publicitada como la del caso Ayotzinapa todavía sigue sin resolverse, ¿qué podemos esperar de otras? Piense que sobre ese caso aún se mantiene –con una especie de respiración artificial alentada por los automatismos del poder- el discurso falso de que los desaparecidos fueron a boicotear un evento local, lo que ha servido para culparlos por su propia desaparición y mantener la crisis en el ámbito del municipio de Iguala (un lugar lejano para la mayoría de ciudadanos, e identificado, por su número de fosas, como un sitio donde son habituales esas desapariciones). También se ha vedado la reflexión sobre la imputación de individuos que toleraron la desaparición de los normalistas a nivel federal, incluso militar. Es probable que investigaciones tan a fondo nos permitieran atisbar una especie de pulmón gigantesco de la ilegalidad, que desde esa parte de Guerrero, pero con ramificaciones por la Región Norte y con nodos federales, mantenía capturado parte del organigrama público del lugar donde desaparecieron los normalistas. Sin embargo, eso se desestimó. Ahora, años

después, un tribunal de ¡Reynosa! ordena la creación de una comisión de la verdad sobre el caso… Y aunque eso sea quijotesco, sí nos plantea cómo se incardinar esa comisión en el ordenamiento jurídico mexicano –al fin y al cabo, ya ha habido comisiones de la verdad en Guerrero y Oaxaca-. Pero frente a ello, la gran PGR y los *mini* PGR (los procuradores locales), comienzan su *lobby* de formalismos vacuos para vetarlo y mantener amplificado el silencio.

Le pongo un segundo ejemplo, esta vez de hace unos meses y en un lugar menos conocido, Nuevo Laredo. Allá, desaparecen una veintena de individuos (algunas fuentes elevan la cifra a la cincuentena), y los familiares denuncian que ha sido la marina. Frente a eso, la primera reacción de las autoridades es negarlo y deslizar que, si ha habido desapariciones, es por individuos disfrazados de marinos. Además, desde redes sociales se sugiere que los desaparecidos estaban vinculados a la delincuencia organizada y que los que lo denuncian también pueden estarlo, y eso sí encuentra una difusión más amplia en la prensa nacional. No obstante, el tema nunca es tan claro como dicen las instituciones, y por las presiones, con el tiempo, se decide investigar desde la misma marina, reconociendo que han suspendido a posibles marinos implicados.

Esos dos casos muestran dos versiones, una oficial y otra más verosímil. La oficial sobre los desaparecidos de Ayotzinapa es que unos estudiantes de dudosa reputación hicieron algo que enojó a un grupo criminal, este los desapareció y cualquier tipo de investigación que cuestione las pruebas al respecto –debilísimas y obtenidas muchas por tortura, por lo que llamar a eso "pruebas" es un eufemismo-, es por afinidad ideológica con los desaparecidos o por una mano negra internacional. Y sobre Nuevo Laredo, la versión oficial es que los marinos son los únicos que están luchando en Tamaulipas contra la delincuencia organizada, que ellos ni siquiera quieren estar allá y si lo están es porque los pánfilos civiles los llamaron, y que si los soldados desaparecen a gente es porque no tienen más remedio para *pacificar el septentrión*. Hasta aquí las versiones oficiales. En realidad, en Ayotzinapa se desconoce el alcance del conglomerado criminal que desapareció a los estudiantes, al igual que los niveles de implicación, tolerancia u omisión de las fuerzas federales, y eso es simplemente una cuestión de qué es verdad y qué no, al margen de ideologías. Sobre Nuevo Laredo, los organismos federales son incapaces de penetrar en el tejido criminal local, y actúan como una extraña fuerza de ocupación, sobre todo porque los marinos que patrullan por las calles o descienden del helicóptero en azoteas de particulares no saben ni siquiera el nombre ni las caras de los vecinos de los lugares por donde pasan todos los días. Eso crea la

posibilidad de ejercer acciones desproporcionadas, porque en ese actuar está la orden implícita de que el ciudadano de Nuevo Laredo es un *cripto narco*, un posible enemigo camuflado al que es mejor anticiparse, interceptarlo, aunque sea violentamente. En esas dinámicas, de las que muchos marinos son solamente parte de un engranaje mayor, es fácil que te desaparezcan. Es más: ¿Y si sí fueran individuos disfrazados de marinos los que hubieran desaparecido a esas decenas de personas? Es cierto que los grupos criminales tamaulipecos son capaces de eso y más, pero ¿quita eso de responsabilidad a los únicos que representan al gobierno federal en ese territorio? Como verán los lectores, el tema tiene muchos ángulos y es difícil despacharlo en dos o tres lemas.

- ¿Por qué sí los números de desaparecidos en la frontera norte del país son mayores, a últimas fechas se reportan más casos en el centro y occidente del territorio nacional?

Porque las desapariciones violentas no son un fenómeno aislado, sino que son parte de las muchas caras de la violencia en México. Por ejemplo, los autores intelectuales o materiales de las desapariciones también matan, extorsionan o corrompen. No hay un profesional que solamente se dedique a desaparecer y nada más. Incluso alguien de un perfil tan exclusivo en su macabro saber hacer como "El Pozolero", ya por su mero actuar comete tres o cuatro crímenes más. Imagine el lector entonces las estructuras macro criminales mixtas, públicas y privadas, que son las que inciden más en las cifras (y eso sin contar que hay otras desapariciones en México, a escala mucho más local- como en Tijuana- y que son más difíciles de prever, tratar y medir, y de las que ha teorizado bien Carolina Robledo ya desde 2010). Desde esas dinámicas violentas, ahora en Colima empiezan a surgir denuncias y las cifras se disparan, y el próximo foco puede que vaya a Nayarit, donde familiares de víctimas están haciendo labores extremas por encontrar ni tan siquiera briznas de sus desaparecidos. Y luego vaya usted a saber dónde se posará el foco rojo, quizá en Puebla, en Guanajuato, lugares donde tenemos cotas de violencia altas en el último año. No lo sé. Pero sí sé que esos giros en la violencia tienen que comprenderse agregados a contextos más previsibles- si se permite la expresión- como Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero o Coahuila, que sí están presentando durante años un fenómeno de fosas y, latentemente, de desaparecidos. A todos ellos tenemos que agregar otras parte del puzle, con lugares inquietantes como Veracruz y su embrollo con las altas cifras de desaparecidos por fuero federal, además de estructuras

estatales que eran juez y parte en los conflictos criminales, como el caso de Tierra Blanca. Porque en Veracruz tenemos hasta procesos al más alto nivel por desaparición forzada, donde el nuevo fiscal pide procesar al antiguo fiscal, los policías estatales actuales reúnen pruebas para encausar a los estatales que les precedieron y el gobernador vigente pone los recursos necesarios para capturar al gobierno que le precedió. Pero si se miran bien las cifras algo no está cuadrando, y seguramente aparezcan de sopetón decenas de cadáveres que sitúen los números ofíciales a la altura del escándalo entre la población jarocha por sus desaparecidos. Finalmente, también hay que armar nuestro modelo teniendo en cuenta que el problema de los desaparecidos de México se está visibilizando progresivamente. Por ejemplo, ya hay una ley federal sobre desaparecidos, hay una serie de formularios tipo que ayudan a las denuncias, pero estas no siempre se hacen en las zonas donde hay más desaparecidos. Por ejemplo, en lugares de la frontera norte donde el día a día se rige antes por el secreto sobre lo que se sabe y la cautela ante quien se habla, que por la denuncia de los crímenes más graves, hay una cifra negra que impide saber la escala de la cuestión.

- ¿Dónde podría estar tanta gente desaparecida y no localizada desde 2007 a la fecha? ¿Necesariamente muerta?

Es probable que los desaparecidos forzadamente a nivel federal sí estén muertos, sobre todo si ese tipo de desapariciones tienen que ver con operativos donde se ejecuta extrajudicialmente o se entrega a individuos a grupos rivales. En las desapariciones de fuero común puede haber una zona gris, si el grupo de delincuentes se lleva a individuos para, por ejemplo, reclutarlos forzadamente –eso es habitual con migrantes, por ejemplo-, o hay arreglos económicos o de intercambio de individuos que por su naturaleza son difíciles de conocer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en general, la supervivencia tras una desaparición violenta al cabo de tres o cuatro días es escasa. Quizá un modo de tener un poquito más de luz sobre lo que sucede en México al respecto sería encontrar una teoría, una hipótesis sólida, que integrase violencia, desapariciones y fosas; es complicado, por los rasgos de esos fenómenos, pero un punto de partida podría ser considerar el sencillo silogismo de que por cada desaparición forzada hay necesariamente una fosa –y estoy tentado de decirle que casi habría dos: una para el desaparecido y otra para quien desaparece, de lo grave que es el problema y la sutileza con la que se ha logrado su ocultación-. Y que la fosa no tendrá la imagen

que esperamos de ella, que puede ser un pozo, una mina o un sótano. En fin, también hay que reflexionar sobre el modo en que los grupos desaparecen violentamente a los individuos, y quizá eso arroje maneras de saber dónde están los cadáveres. Por ejemplo, es necesario partir de que no todos los grupos criminales son iguales y cada uno prefiere un modo de operar, puesto que la técnica de la desaparición (que ya se daba antes del 2000, aunque con un énfasis contrainsurgente), se ha popularizado. Y los lectores saben que cuando algo se populariza se adapta a las idiosincrasias y circunstancias de cada región, de cada grupo, de cada líder. Además, hay que preguntarse: ¿Por qué desde 2007? Y antes, ¿qué? ¿No se desaparecía violentamente antes? Quizá no a la escala que estamos viendo, pero sí se mataba y desaparecía a gente. Pero es como si el fetiche de la gestión y la estadística permitiesen amputar asépticamente ese pasado violento y eso provoca que dejemos a muchos ciudadanos mexicanos en un limbo de frustración y desconfianza crónicos. Tanto esos individuos desaparecidos en el pasado, como los que son desaparecidos por individuos que no entran dentro de nuestra idea de Estado o grupo criminal, son las otras dos patas para categorizar a los desaparecidos violentamente en México.

- ¿Qué tiene que ocurrir para que esta situación sea contenida o eliminada en esta nación?

En primer lugar, debemos tener cifras claras sobre desaparecidos violentamente y fosas, y lograr establecer modos de explicar la relación entre ambos rubros. En segundo lugar, debemos comprender que lograr esas cifras claras no traerá mágicamente la solución. Si usamos como único criterio lo estadístico, las subidas y las bajadas de datos, estamos como cuando otro burócrata de la estadística, el alto cargo policial Ervin H. Burrell, personaje de la serie de televisión *The Wire,* dice a sus subordinados: “Cualquiera que no pueda traer las cifras que necesitamos, será sustituido por alguien que pueda”. Lo que se requiere son categorías que nos permitan ponderar esos datos, saber su transcendencia, qué valen en relación con otras categorías. Por decirlo gráficamente, el dato de un desaparecido forzadamente no pesa lo mismo que la de un individuo al que le han robado un carro. Digamos que el desaparecido tiene raíces, que se enraízan en un funcionamiento de las instituciones terrible y que no se arregla solamente con depuraciones de burócratas o cuadrando cifras, sino con acciones de fondo, jurídicas y extrajurídicas, pero que requieren de un impulso estatal para llegar a partes del territorio

nacional. Sin embargo, el culto al *management* y a la estadística en las altas esferas burocráticas conduce a gestiones estériles, al vaciamiento institucional, y por ello esas instituciones siguen inundándose, a un ritmo ágil, de fosas, cadáveres y restos humanos. Frente a ello, pensemos que si una desaparición forzada es la tríada de desaparición de una persona, institución oficial que desaparece y negativa a dar a conocer el paradero, en la mayoría de desapariciones violentas en México, aunque pueda haber un grado de apoyo, tolerancia o aquiescencia públicos, se debe añadir una cuarta acepción a la definición, pues esta mayoritariamente-si hemos de hacer caso a las cifras de fuero común- se realiza por una estructura criminal mixta –pública y privada-, de la que no se tiene una idea clara de sus rasgos. Es como si fuera sencillo desaparecer porque quienes desaparecen están ocultos, no se sabe nada de ellos, salvo mitos, rumores o propaganda. En resumen, ni siquiera quienes implementan las políticas públicas saben enunciar una idea no contradictoria del grupo criminal al que acusan de las desapariciones. Así es difícil decir algo, por mucho que se mueva la boca.